



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 16 de Junio de 2022

Autos y Vistos; Considerando:

1º) Que a fs. 146/163 Gire S.A. inicia acción declarativa de certeza en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de San Luis, con el objeto de poner fin al estado de incertidumbre en el que afirma encontrarse con motivo de la obligación tributaria que le reclama la demandada en concepto de impuesto de sellos, mediante la resolución 37617-DPIP-2018, dictada con sustento en el art. 218 bis del código fiscal local y en el punto 1 de los incisos a y e del art. 31 de la ley provincial VIII-254/2017, cuya declaración de inconstitucionalidad solicita.

Asimismo, pide que se ordene la repetición de lo pagado a la demandada a través de retenciones bancarias, realizadas con fundamento en la aplicación de la normativa tributaria local cuestionada durante los períodos que estima no prescriptos (8/2008 a 12/2017), más intereses.

Sostiene que por medio de las normas provinciales mencionadas se instituyen alícuotas diferenciales en el impuesto de sellos para las transferencias bancarias según el lugar donde se encuentre radicada la cuenta que recibe el depósito. Precisa, al respecto, que "si la transferencia de fondos es efectuada desde una cuenta bancaria radicada en la provincia de San Luis a otra cuenta bancaria radicada en la misma provincia, aplica una alícuota del 0,0 %"; mientras que "si la transferencia de fondos

es efectuada desde una cuenta bancaria radicada en la provincia de San Luis a otra cuenta radicada en otra jurisdicción fuera de la provincia de San Luis, aplica una alícuota del 7,2 % " (conf. fs. 147, 2° y 3° párr., el subrayado pertenece al original).

Afirma que tal proceder resulta contrario a lo establecido en los arts. 9°, 10, 11, 16, 31, 75 -incs. 6°, 12, 13, 18, 19, 30 y 32- y 126 de la Constitución Nacional.

Argumenta que la regulación cuestionada es ilegítima porque contradice las garantías de igualdad y razonabilidad, que distorsiona la libertad de circulación de los bienes en el país, que funciona como un derecho aduanero por el que la demandada procura evitar o desincentivar la salida de fondos de su jurisdicción, que afecta el régimen general del sistema financiero, al encarecer las transferencias bancarias realizadas a cuentas radicadas fuera de su territorio y que por ese medio la provincia demandada se atribuye facultades que corresponden al Banco Central de la República Argentina (regulado por leyes federales, 21.526 y 24.144).

Por último, solicita que se dicte una medida cautelar ordenándose a la demandada que se abstenga de iniciar acciones ejecutivas tendientes al cobro de la obligación tributaria que se impugna, así como de los recargos administrativos, intereses y multas a ella vinculados. Asimismo, en el mismo carácter, pide que la provincia se inhíba de solicitar y trabar medidas cautelares contra Gire S.A. o sus representantes (en cuanto



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

puedan ser imputados como responsables solidarios de la deuda reclamada por la provincia) y que se ordene la suspensión del trámite de todo expediente administrativo relacionado con el reclamo fiscal que aquí se cuestiona.

2º) Que, de acuerdo con lo establecido por el art. 117 de la Constitución Nacional, la competencia originaria de la Corte procede en aquellos casos en los que es parte una provincia cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 311:1812 y 2154; 313:98 y 548; 315:448; 318:992 y 2457; 322:1470; 323:2380 y 3279).

3º) Que, de los términos de la demanda -a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia, según los arts. 4º y 5º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y doctrina de Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230- se desprende que la actora cuestiona la referida normativa provincial por considerarla contraria a los arts. 9º, 10, 11, 16, 31, 75 -incs. 6º, 12, 13, 18, 19, 30 y 32- y 126, de la Constitución Nacional, entre otros.

4º) Que, en tales condiciones, cabe asignar manifiesto contenido federal a la materia del pleito, ya que lo medular del planteamiento que se efectúa remite necesariamente a desentrañar el sentido y los alcances de los referidos

preceptos, cuya adecuada hermenéutica resultará esencial para la justa solución de la controversia y permitirá apreciar si existe la mentada violación constitucional (Fallos: 311:2154, cons. 4°).

5°) Que, con relación a la medida cautelar solicitada, cabe recordar que esta Corte ha decidido que medidas como la requerida no proceden, en principio, respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan (Fallos: 326:2741; 328:3018, entre otros), criterio que adquiere particular estrictez frente a pretensiones fiscales de los Estados provinciales (Fallos: 313:1420; CSJ 2718/2017 "Wertheim, Andrea y otros c/ La Pampa, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad", del 11 de junio de 2019, entre otros).

6°) Que, por otro lado, todo aquel que pretenda la tutela anticipada a través de una medida de esta naturaleza debe acreditar *prima facie* la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y la inminencia o irreparabilidad del perjuicio (arts. 230 y 232, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 323:1849, entre otros).

En el caso, el Tribunal considera que no se encuentran configurados los presupuestos necesarios para la disposición de la medida solicitada. En particular, en cuanto



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

atañe a la inminencia o irreparabilidad del perjuicio, dado que las consideraciones generales que la actora formula a su respecto son insuficientes para considerar satisfecho ese recaudo (ver punto 7.2 de la demanda).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional. II. Correr traslado de la demanda interpuesta contra la Provincia de San Luis, la que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días (arts. 338 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Para su comunicación al señor Gobernador y al señor Fiscal de Estado, líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de San Luis. III. Desestimar la medida cautelar peticionada. Notifíquese y comuníquese a la Procuración General de la Nación.

DISI-//-

-//-DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS  
FERNANDO ROSENKRANTZ

Considerando que:

Se dan por reproducidos los considerando 1° a 4° de la sentencia del Tribunal.

5°) Que este Tribunal ha establecido que si bien, por vía de principio, medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases *prima facie* verosímiles. (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 316:2855, entre muchos otros).

Además, en "Albornoz, Evaristo Ignacio c/ Nación Argentina" (Fallos: 306:2060) se dejó establecido que, por su naturaleza, las medidas cautelares, "no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad".

En el presente caso resultan suficientemente acreditadas la verosimilitud en el derecho y la configuración de



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

los presupuestos establecidos en los incisos 1° y 2 ° del art. 230 del código adjetivo para acceder a la medida pedida.

6°) Que, la parte actora ha puesto en cuestión la validez constitucional de la Ley Impositiva VIII-254 dictada por la Provincia de San Luis, sobre cuya base se grava con alícuotas más elevadas del impuesto de sellos aquellas transferencias bancarias hacia cuentas radicadas fuera de la provincia (art. 31, incisos a y e en la versión de la ley VIII-254 sancionada para el año 2018). Así, mientras que las transferencias entre cuentas radicadas en la provincia o hacia cuentas radicadas en la provincia tendrían establecida una alícuota igual a cero, las transferencias hacia cuentas radicadas en otras provincias estarían gravadas con una alícuota del 7,2 por mil entre los años 2013 y 2017 (cfr. fs. 122 a 130).

El texto de las normas impugnadas y los hechos denunciados en la demanda, tal como ellos surgen de la documental acompañada (fs. 61-63 y 83-90), ponen de manifiesto, con la provisoriedad propia de toda decisión cautelar, una situación similar a la de otros casos en los que esta Corte ha resuelto suspender cautelarmente los procedimientos dirigidos a la percepción de deudas por diferencias correspondientes a alícuotas que incidían en mayor medida sobre el comercio interprovincial que sobre el comercio interior de la provincia (cfr., entre muchos otros, CSJ 38/2014 (50-D)/CS1 "Droguería del Sud S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 2 de junio de 2015 y CSJ 2025/2017 "La

Redención S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 5 de agosto de 2021). Con posterioridad, al dictar la sentencia definitiva, ha confirmado la existencia de la sobrecarga impositiva en perjuicio del comercio interjurisdiccional por efecto de las alícuotas diferenciales (cfr., por todas, causa CSJ 38/2014 (50-D)/CS1, citada anteriormente, sentencia definitiva del 6 de noviembre de 2018).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional. II. Correr traslado de la demanda interpuesta contra la Provincia de San Luis que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días (arts. 338 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Para su comunicación al señor Gobernador y al señor Fiscal de Estado, líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de San Luis. III. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada; en consecuencia, el Estado provincial deberá abstenerse de ejecutar a Gire S.A. las diferencias pretendidas en concepto de impuesto de sellos por los períodos enero de 2013 a diciembre de 2016 sobre transferencias bancarias cuya cuenta de destino se encuentra radicada fuera de la Provincia de San Luis (resolución 37617-DPIP-2018); todo ello hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones. Líbrese oficio al señor Gobernador a fin





*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

de poner en su conocimiento la presente decisión. Notifíquese y comuníquese a la Procuración General de la Nación.

Parte actora: **Gire S.A., letrado apoderado, Dr. Javier Malamud. Letrado  
patrocinante: Dr. Liban Angel Kusa.**

Parte demandada: **Provincia de San Luis (no presentada en autos).**